

Señores

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.



Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: CARLOS ENRIQUE FLÓREZ Y OTROS
Demandado: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
Llamado en garantía: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
Radicación: 76001333300520230032600

FANNY TRUJILLO RODRÍGUEZ, mayor y vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.280.445 de Cali, abogada en ejercicio, con tarjeta profesional No. 63.738 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada especial de **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.** sociedad llamada en garantía por el **DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**, procedo a contestar el medio de control y el llamamiento en garantía, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda y el llamamiento, en los siguientes términos:

I. RESPECTO AL MEDIO DE CONTROL

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

FRENTE AL HECHO "PRIMERO": No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior, por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO "SEGUNDO": No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior, por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente

dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO "TERCERO": No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación. Adicionalmente, en la documentación aportada no se observa ninguna prueba que certifique que el señor Flórez tenía el ingreso anunciado en este hecho y un extracto bancario solo muestra movimientos. Ahora bien, si fundamentara en su acción, ser trabajador independiente, tampoco se aporta ninguna planilla PILA que soporte su dicho.

FRENTE AL HECHO "CUARTO": No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO "QUINTO": No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO "SEXTO": No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO "SÉPTIMO": No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación. Cabe resaltar que el apoderado de las demandantes no aporta certificación laboral con la que se busque demostrar un vínculo laboral.

FRENTE AL HECHO "OCTAVO": No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “NOVENO”: No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO”: No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO PRIMERO”: No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación. No obstante, ante el evento que demuestre por la parte actora que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cali trasladó al señor Flórez a un centro asistencial, determina en lo absoluto y no es indicio alguno de responsabilidad a cargo del Distrito de Cali.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO SEGUNDO”: No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

Cabe aclarar que la afirmación hecha por el apoderado de la parte pasiva no es propiamente un hecho, corresponde a un juicio de valor y a apreciaciones subjetivas.

Ahora bien, es importante resaltar al despacho judicial que el señor CARLOS ENRIQUE FLOREZ tiene licencia de conducción de vehículos de categoría A2 desde el 2016, por lo que no son 19 años de experticia demostrada, adicionalmente en la licencia de conducción del señor CARLOS ENRIQUE FLOREZ, aparece la anotación de la restricción de conducción con lentes, por lo que debe tener una mayor precaución y diligencia en la conducción de este tipo de vehículos.

Nro. licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones
94416910	STRIA TToYTTE MCPAL CANDELARIA	24/05/2023	ACTIVA	CONducir con lentes

Es claro que obtener una licencia de conducción determina la idoneidad para conducir vehículos más no es prueba de que el conductor sea una persona con experticia o diligencia en el ejercicio de la actividad peligrosa.

Aunado a lo anterior, con el mismo hecho anuncia una previsibilidad de que si conocía o no las vías, pudo evitar su propio accidente, configurándose así una culpa exclusiva de la víctima. Lo anterior no significa asunción de responsabilidad.

No nos consta el hecho de que se haya desempeñado en años anteriores en cargos de repartidor y/o domiciliario, por lo que el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO TERCERO”: No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación. Por otro lado, el tener comparendos o multas, no determina la responsabilidad del Distrito de Cali, ni que no tenga culpa el demandante por la ocurrencia de los hechos.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO CUARTO”: No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación. Por otro lado, el tener la póliza de seguro obligatorio SOAT, no determina la responsabilidad del Distrito de Cali, ni que no tenga culpa el demandante por la ocurrencia de los hechos.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO QUINTO”: Es cierto. No obstante, el tener la licencia de conducir, no determina la responsabilidad del Distrito de Cali, ni es prueba de que el conductor sea una persona con experticia o diligencia en el ejercicio de la actividad peligrosa y mucho menos es eximente de la causalidad de la ocurrencia de los hechos.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO SEXTO”: No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO SÉPTIMO”: No me consta, deberá probarlo la parte que lo aduce. Lo anterior por cuanto mi representada no es partícipe de este hecho. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DÉCIMO OCTAVO”: Es cierto. No obstante, ello no significa que el Distrito de Santiago de Cali esté asumiendo de responsabilidad de los daños que se le ocasionaron a los actores.

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

A pesar de la carencia total de elementos que permitan siquiera inferir la existencia de una obligación reparadora y/o indemnizatoria por parte de mi representada, es necesario referirnos puntualmente a las pretensiones de la parte actora. Sin embargo, es igualmente claro que quien solicita una indemnización por un perjuicio debe, en primer lugar, acreditar la calidad en la que lo hace y, en segundo lugar, probar dicho perjuicio. En este sentido, observamos que ninguno de los perjuicios cuya indemnización se solicita ha sido probado.

En cuanto al perjuicio moral, mencionado en el apartado de las pretensiones, es importante recordar que los perjuicios no pueden ser indemnizados basándose en presunciones. Debe haber certeza absoluta tanto en la calidad en la que se piden como en la causación del daño; de lo contrario, no será posible obtener una sentencia condenatoria o una declaración de responsabilidad, ya que esta no puede basarse en presunciones sin elementos probatorios que permitan concluir su certeza.

En el escrito de demanda, los demandantes no presentan ninguna manifestación sobre la causación del daño. Solo se observa en las pretensiones la suma de dinero que supuestamente correspondería a cada uno de los perjuicios materiales alegados. Cabe advertir que ninguno de estos perjuicios contiene prueba de su existencia real, razón por la cual tampoco pueden ser concedidos, incluso en el improbable caso de que se logre acreditar la responsabilidad de mi representada. Así lo ha manifestado el Consejo de Estado¹:

"No basta con que se demuestre que el desaparecido era una persona económicamente productiva, para que automáticamente proceda el reconocimiento de indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, es

¹ Consejo de Estado. Sección Tercera, 26 de junio de 1997, C. P Dr. Suarez Hernandez. Expediente 11508.

necesario que se demuestre la existencia del daño, es decir, es menester probar que con sus ingresos proporcionaba ayuda económica a alguna persona que se vio afectada por no seguir recibiendo tal ayuda.”

En virtud de todo lo anterior me pronuncio de manera puntual a las pretensiones de la siguiente manera:

FRENTE A LA PRETENSIÓN “PRIMERO.”: Objeto y me opongo a que se declare administrativamente responsable a los demandados DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, y en virtud de dicha declaratoria, la responsabilidad solidaria y/o la responsabilidad de pago cargo de la compañía de seguros MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., por los daños y perjuicios materiales, inmateriales y demás causados a los actores del medio de control, por el accidente ocurrido el 25 de abril de 2022, por un presunto mal estado de la vía derivado de la omisión de las entidades demandadas respecto a sus obligaciones de mantenimiento vial y señalización Esta objeción se presenta considerando que la parte actora no aporta prueba idónea de que el accidente de tránsito, como hecho dañoso sea imputable a las demandadas.

En relación con los accidentes de tránsito causados por la falla del servicio de la administración consistente en la omisión del deber legal de señalización de la vía que se encuentra obstruida, obstaculizada o afectada con motivo de la realización de una obra pública, reparación o cambios transitorios, El Consejo de Estado ha indicado que los daños que se deriven de estos le son imputables al Estado siempre que se verifique que la entidad encargada de dichos deberes no controle o vigile la ejecución de dichas obras, como tampoco el normal y adecuado tránsito de la ruta correspondiente.

Igualmente, El Consejo de Estado ha establecido que para que se presente la aludida falla del servicio, es necesario que la entidad correspondiente haya conocido la existencia de elementos que obstaculizaran o afectaran la vía o que, siendo su obligación, negligentemente no los conoció.

Adicionalmente, merece la pena resaltar que el hecho dañoso ocurrió en la ejecución de una actividad peligrosa, y que la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia ha concluido la presunción de culpa sobre la persona que está en ejercicio de dicha actividad.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “SEGUNDA.”: Objeto y me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se no se demuestra por la parte actora los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de

imputación, a saber:

- 1.** Daño antijurídico: Entendido como aquel daño que la víctima no está en deber jurídico de soportar; lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; y que sea cierto.
- 2.** La imputación: Que requiere abordar dos niveles, uno fáctico (atribución material, a través de la cual se determina el origen de un resultado que se adjudica a una acción u omisión) y otro jurídico (fundamento de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico)

El juicio de responsabilidad extracontractual del Estado tradicionalmente se ha estructurado mediante el estudio del daño, la imputación y el fundamento. No obstante, en postura reciente de la jurisprudencia contenciosa administrativa establece que el juicio de responsabilidad del Estado debe analizarse dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

El accidente de tránsito donde se vio involucrado el señor CARLOS ENRIQUE FLÓREZ y los daños que se ocasionaron con este, no le son imputables fáctica ni jurídicamente al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, pues no se demuestra de manera conducente y pertinente que la acción u omisión de esta entidad haya ocasionado los daños.

Respecto de los perjuicios materiales:

Lucro cesante: Me opongo a que se despache favorablemente esta pretensión comoquiera que la parte actora no demuestra que al momento de los hechos estuviera laborando o que tuviera un ingreso fijo como trabajador independiente. Además de ello, tampoco prueba siquiera que cotiza al sistema de la seguridad social. De allí que no se puede hablar de la ocurrencia de este perjuicio.

Por otro lado, la parte actora coloca a su capricho una pérdida de capacidad laboral que no está soportada en ningún dictamen expedido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez. De allí, que al ni siquiera probarse una PCL, no se puede reconocer la existencia del lucro cesante.

Ahora bien, en el evento que se pretenda la aplicación de presunciones para obtener reparación de los daños materiales, el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 2019 en el proceso con Exp. No 44572, manifestó:

"(...) a juicio de la Sala, resulta mejor, con miras a un adecuado ejercicio de la labor de impartir justicia, soslayar el uso de presunciones de orden jurisprudencial que lleven a reconocer de oficio perjuicios de este tipo, pues evitarlas y, por tanto, decidir con sustento en hechos o supuestos efectivamente probados garantiza de manera efectiva y eficaz el principio de congruencia de las sentencias y mantiene incólumes el principio de justicia rogada y el principio dispositivo⁷¹, los cuales orientan la actividad y las decisiones de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Agrégase a lo anterior que las orientaciones jurisprudenciales anteriormente mencionadas y las presunciones jurisprudenciales aplicadas con el objeto de determinar la existencia y el monto de los perjuicios materiales podrían entenderse en el sentido de que, cumplidas ciertas condiciones, los demandantes tienen derecho, per se, a obtener el pago de perjuicios en determinado monto; sin embargo, ello podría llevar a desconocer involuntariamente en algún caso que el reconocimiento de un perjuicio solo procede si ha sido solicitado por la parte interesada, lo que implica que ésta lo reclame de manera expresa y cuantifique su monto de manera razonada (artículo 162, numerales 2 y 6 del C.P.A.C.A. – antes artículo 137 del C.C.A.- y artículo 281 de C.G.P. –antes 305 del C. de P.C.-) y a ello se puede acceder siempre que dicha parte haya cumplido con la carga de acreditar tanto la existencia como la cuantía del perjuicio.

(...)

Los perjuicios materiales solo pueden decretarse previo estudio motivado y razonado que tenga en cuenta las pretensiones y las pruebas aportadas por la parte; así, solo se puede conceder al demandante el perjuicio reclamado, a partir de la apreciación razonada y específica que el juzgador realice de los medios probatorios obrantes en el expediente, en la que se consideren las circunstancias concretas que permitan deducir que, en efecto, la detención le generó la pérdida de un derecho cierto a obtener el ingreso que, de no haberse producido el daño, habría seguido percibiendo o podría haber percibido como producto de la labor que desempeñaba antes de ser privado de la libertad o que iba a empezar a percibir en razón de una relación existente pero que apenas iba a empezar a cumplirse.

(...)”

Respecto de los perjuicios morales y daño a la salud: Están tasados de indebida manera, los perjuicios morales están calculados al arbitrio de la parte demandante sin sustento alguno, desconociendo de paso la jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia. En ese sentido, al no haber siquiera aporte de un

soporte técnico de pérdida de capacidad laboral, ni incapacidades debidamente probadas en las que se puedan basar la tasación de estos, no hay lugar a reconocimiento de este perjuicio y mucho menos en las elevadas tasas que fueron solicitadas.

Me opongo a la prosperidad de los daños morales y daño a la salud, toda vez que, de conformidad con el artículo 167 del Código General, aplicable por remisión del artículo 211 de la ley 1437 de 2011, *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”* la parte demandante no acredita la congoja y la aflicción producidas. Aunque la pretensión no está dirigida de manera directa a mi representada, quien fue llamado en garantía al proceso, no se aportan pruebas suficientes que permitan establecer con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Al no poder endilgarse responsabilidad al demandado, al Municipio de Santiago de Cali, menos podrá ser responsable mi representado, dentro de este proceso, toda vez, no existe sustento jurídico ni factico para proceder con todo lo solicitado.

Respecto de otras medidas reparatorias: Me opongo a que se despachen favorablemente por dos razones. La primera porque no se configuran los elementos de responsabilidad del Estado por los argumentos antes expuestos y segundo, porque el apoderado de la parte actora no pide nada en concreto en este ítem. En consecuencia, si no hay una pretensión clara, mucho menos se puede plantear que el juez conceda una pretensión de esa naturaleza.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “TERCERA.”: Objeto y me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA DE LA DEFENSA:

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991, señala:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Este artículo es el fundamento de la responsabilidad del Estado, en el cual se desprende los siguientes elementos:

1. Daño antijuridico: Entendido como aquel daño que la víctima no está en deber jurídico de soportar; lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; y que sea cierto.

2. La imputación: Que requiere abordar dos niveles, uno fáctico (atribución material, a través de la cual se determina el origen de un resultado que se adjudica a una acción u omisión) y otro jurídico (fundamento de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico)

La mera ocurrencia del hecho no determina responsabilidad de las entidades accionadas. En el caso en cuestión, si bien se ha presentado un accidente de tránsito en el que resultó lesionado el señor Carlos Enrique Flórez, esto por sí solo no implica automáticamente la responsabilidad de la llamante en garantía y de mi representada.

Aunado a lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia 08001233100019980066301 (38432), Feb. 8/17, precisó que la demostración del mal estado de la vía no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del nexo causal entre este y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla vial.

De conformidad con lo anterior, podríamos decir que estamos ante un hecho de la víctima, toda vez que por su actuación causó sus propios daños, toda vez que no logró demostrar de manera pertinente y conducente que su caída se ocasionó por el estado de la vía, así como la existencia de una omisión por parte de las entidades demandadas.

Además, los perjuicios alegados no están probados. La parte actora ha solicitado una indemnización por diversos perjuicios, incluyendo perjuicio moral. Sin embargo, la demanda carece de pruebas que acrediten la existencia real de estos perjuicios. No se han presentado informes médicos detallados, evaluaciones psicológicas o cualquier otra documentación que sustente las alegaciones de la parte actora. En ausencia de pruebas concretas y verificables, no es posible otorgar una indemnización, ya que los perjuicios no pueden ser presumidos.

EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA

PRIMERA EXCEPCIÓN: AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A LA PARTE PASIVA

Es pertinente resaltar que, en materia de responsabilidad, al interior del proceso deben hallarse probados los elementos fundamentales que exige la ley para

determinar que efectivamente existe una responsabilidad por parte del Estado por el título de falla en el servicio y, por consiguiente, una obligación frente a una posible reparación. Estos elementos son: la existencia de un hecho dañoso y la imputación. En ausencia de uno de estos elementos, la declaración judicial deberá ser desfavorable a los intereses del demandante, declarando la inexistencia de la responsabilidad del demandado.

En el presente caso objeto de litigio, el elemento de imputación se encuentra totalmente ausente, pues no existe prueba idónea que determine que el supuesto daño sufrido por el demandante se hubiese dado como consecuencia directa por la falla en el servicio de los demandados.

Debe tenerse en cuenta que, en este caso, el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) solamente habla de un volcamiento, más no que éste haya sido por un supuesto hueco y/o la ausencia de señalización, aunado a que no se aporta una prueba técnica que soporte los dichos de la parte actora.

Así las cosas, se puede concluir que no existe certeza sobre las circunstancias en las que sucedió el accidente de tránsito. No es posible tomar como base lo expuesto en el relato del demandante, ya que no hay nada que corrobore los dichos de la parte actora.

Por lo tanto, solicito se DECLARE PROBADA esta excepción en la medida que con la demanda presentada y las pruebas aportadas no se vislumbra siquiera responsabilidad de la parte pasiva, sino por el contrario se avizora una culpa exclusiva de la víctima.

SEGUNDA EXCEPCIÓN: INEXISTENCIA DE LUCRO CESANTE:

En el presente caso, se debe enfatizar la inexistencia de lucro cesante, debido a que el demandante no ha presentado ninguna certificación laboral que acredite su vinculación formal a una empresa o entidad que respalde la existencia de una relación laboral vigente al momento del accidente. En consecuencia, no hay prueba que demuestre que el demandante percibía ingresos derivados de una actividad laboral formal y continua.

Adicionalmente, no se ha aportado ningún informe médico o pericial que indique una pérdida de capacidad laboral del demandante como consecuencia del accidente en cuestión. La falta de evidencia médica que certifique una incapacidad temporal o permanente para trabajar impide fundamentar una reclamación por lucro cesante. No se han presentado documentos contables, recibos de nómina, declaraciones de

impuestos, estados de cuenta bancarios, u otros medios probatorios que acrediten los ingresos percibidos por el demandante con anterioridad al accidente. La carencia de esta información impide calcular de manera precisa y objetiva cualquier pérdida económica alegada.

Asimismo, no se ha proporcionado una cuantificación clara y razonada de la supuesta pérdida de ingresos sufrida por el demandante. Sin una demostración concreta y verificable de los montos económicos afectados, la reclamación por lucro cesante carece de fundamento legal. Finalmente, no se ha establecido una relación directa y causal entre el accidente y la supuesta pérdida de ingresos del demandante.

La falta de conexión causal debidamente probada debilita sustancialmente cualquier pretensión de indemnización por lucro cesante. Por lo anterior, solicito respetuosamente al Despacho que se declare la inexistencia de lucro cesante en la presente causa y, en consecuencia, se desestime cualquier reclamación económica relacionada con este concepto.

Adicionalmente, en el evento que se pretenda la aplicación de presunciones para obtener reparación de los daños materiales, el señor juez deberá tener en cuenta el precedente del H. Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 2019 en el proceso con Exp. No 44572.

Por lo tanto, solicito se DECLARE PROBADA esta excepción.

TERCERA EXCEPCIÓN: TASACIÓN EXCESIVA DE LOS PERJUICIOS MORALES:

Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que el mismo no “constituye un «regalo u obsequio»,” por el contrario se encuentra encaminado a “reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares”², con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa», sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia³.

Así pues, si bien es cierto que no existen criterios objetivos aplicables de manera mecánica a los casos en los que se deba reparar este daño, lo cierto el Consejo de

² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004- 032 (M.P: Luis Armando Tolosa Villabona).

³ Ibidem.

Estado a lo largo de su jurisprudencia ha establecido unos parámetros para la cuantificación de este.

Al respecto la corporación unificó en el 2014 sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de lesiones personales. En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo con factores como el porcentaje de incapacidad laboral que dejó la lesión y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. No obstante, lo anterior, deberá demostrarse el vínculo emocional con el fin de tasar los perjuicios.

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

No obstante, en el caso sub judice la parte demandante, desatendiendo los criterios jurisprudenciales, solicita que se le realicen el pago de 180 SMMLV por concepto de perjuicios morales, monto que no se encuentra soportado en ningún documento, máxime que no está acreditada la pérdida de capacidad laboral que permita inferir que el demandante haya sufrido un daño moral. De allí que su señoría no puede reconocer siquiera este hecho y debe declarar probada esta excepción y condenar en costas a la parte demandante.

CUARTA EXCEPCIÓN: TASACIÓN EXCESIVA DEL DAÑO A LA SALUD:

En relación con el daño a la salud, la Corte ha señalado que no constituye un "regalo u obsequio", sino que se destina a reparar el daño a la salud del afectado, de acuerdo con los elementos de convicción y las particularidades del caso. Estos criterios se enmarcan en la jurisprudencia, buscando una impartición de justicia verdadera, justa, recta y eficiente.

Aunque no existen criterios objetivos aplicables de manera mecánica para la reparación de este tipo de daño, el Consejo de Estado ha establecido parámetros

para su cuantificación a lo largo de su jurisprudencia. En 2014, unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en casos de lesiones personales, trazando guías para la tasación del daño moral basadas en factores como el porcentaje de incapacidad laboral resultante de la lesión y el grado de parentesco de los demandantes con la víctima directa. No obstante, es necesario demostrar el vínculo emocional para tasar adecuadamente los perjuicios, así:

GRAFICO	
REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD	
REGLA GENERAL	
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima directa
	SMLMV
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

En el caso sub judice, la parte demandante, desatendiendo estos criterios jurisprudenciales, solicita el pago de 20 SMMLV por concepto de daño a la salud, monto que no está respaldado por ningún documento, específicamente una PCL. Además, no se ha acreditado la pérdida de capacidad laboral que permita inferir que el demandante haya sufrido un daño a la salud. Por lo tanto, su señoría no puede reconocer esta reclamación y debe declarar PROBADA esta excepción y condenar en costas a la parte demandante.

QUINTA EXCEPCIÓN: CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA:

Frente al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario demostrar que esta persona participó de manera directa y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño.

La culpa se define como la conducta reprochable del demandante por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confiar imprudentemente en poder evitarlos. La culpa grave se caracteriza por un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el dolo implica la realización de una conducta con la intención de causar daño a una persona o su patrimonio.

En este caso, al no demostrar el demandante diligencia en su actuar, se sugiere que fue culpable del accidente de tránsito, especialmente en una situación que implica maniobras con medios de transporte, en ejercicio de una actividad peligrosa.

Correspondía al demandante, como a cualquier persona que decide realizar una actividad peligrosa, como la conducción de vehículos (motocicleta en este caso), tomar las precauciones necesarias conforme al Código Nacional de Tránsito. Esto es crucial para no poner en riesgo innecesario su propia integridad física y la de terceras personas. El conductor no actuó con el debido cuidado exigido cuando se encuentra en ejercicio de una actividad considerada peligrosa.

Por lo expuesto, solicito a su señoría declarar PROBADA la presente excepción.

SEXTA EXCEPCIÓN: ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA:

El enriquecimiento sin causa se presenta en los casos en los que un patrimonio se ve incrementado a expensas de otro, sin que exista una causa jurídica para ello. En cuanto a los elementos materiales, podemos decir que son tres:

- i) enriquecimiento de un patrimonio,
- ii) empobrecimiento de otro y
- iii) un origen común entre los dos.

Entonces, el enriquecimiento es un aumento en el patrimonio de una persona, lo cual debe ser a expensas del patrimonio de otro, para que se cumpla con los dos primeros elementos materiales. Por último, es necesario que exista un hecho común que permita identificar un punto de referencia entre el beneficio obtenido y el detrimento económico generado.

En el caso en comento, dado que no se prueba ni el hecho, ni los perjuicios, que se pretenda una condena en contra de la parte pasiva constituye enriquecimiento sin justa causa, situación que deberá ser reconocida en la sentencia.

SÉPTIMA EXCEPCIÓN: CADUCIDAD, COMPENSACIÓN Y NULIDAD RELATIVA

Anticipadamente solicito al señor juez de la manera más respetuosa se sirva declarar la compensación de las cifras que llegaren a ser probadas en el proceso, así como las causales de nulidad relativa que resulten probadas en el curso de la actuación judicial. Así mismo, cualquier causal de caducidad que se encuentren probadas dentro del transcurso procesal.

OCTAVA EXCEPCIÓN: INNOMINADA

Esta excepción tiene su fundamento especial en el artículo 282 del Código General

del proceso. Dice esta norma: "Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deberán alegarse en la contestación de la demanda".

No todo lo que constituye excepción que pueda beneficiar al demandado se puede visibilizar desde el comienzo del proceso, por cuanto que éste, apenas empezando, no es susceptible de pronunciamientos de fondo. Es necesario que el proceso avance y a medida que lo haga, se vayan notando las coincidencias o contradicciones en las expresiones de las partes que lo componen.

Lo que sí vale desde el comienzo, es la sinceridad, seriedad y seguridad con que cada una de las partes use para plasmar sus hechos. y sus puntos de vista en torno de esos hechos, que a la postre pueden identificar una excepción, concepto éste con el cual o bajo el cual generalmente se expone un medio de defensa por parte del demandado.

En el fondo, pues, lo que interesa es que, a falta de titularidad y precisión gramatical del término, lo que vale, es que el demandado exprese tales circunstancias de hecho con las que el juez pueda llegar al convencimiento de que lo que se impone no es una condena, sino la absolución del demandado o, como en este caso, la plena exclusión de éste por todas las razones aducidas en el presente escrito.

II. CONTESTACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

PRONUCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

FRENTE AL HECHO "1": Es cierto.

FRENTE AL HECHO "2": Es cierto.

FRENTE AL HECHO "3": Es cierto.

FRENTE AL HECHO "4": Es cierto.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

Frente a la pretensión única: En la medida en que la pretensión de este numeral corresponde a la solicitud de vincular como llamada en garantía a mi representada no me opongo.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

PRIMERA EXCEPCIÓN: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A, CON BASE EN PÓLIZA DE SEGURO No. 1507221003127 POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

La Corte Suprema de Justicia ha reiterado en su jurisprudencia que para que exista la obligación de indemnizar por parte de la compañía aseguradora, derivada del contrato de seguro, es requisito sine qua non la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo establecido en el artículo 1072 del Código de Comercio, porque sin daño o sin detrimento patrimonial no puede operar el contrato:

Una de las características de este tipo de seguro es «la materialización de un perjuicio de estirpe económico radicado en cabeza del asegurado, sin el cual no puede pretenderse que el riesgo materia del acuerdo de voluntades haya tenido lugar y, por ende, que se genere responsabilidad contractual del asegurador. No en vano, en ellos campea con vigor el principio indemnizatorio, de tanta relevancia en la relación asegurativa».

Como ya se ha argumentado de manera reiterada y suficiente, las pretensiones contenidas en el escrito de demanda carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, especialmente porque no existe ningún tipo de obligación en cabeza de los demandados, ya que no se configuran los elementos necesarios para que la misma sea predicada, sin que se evidencie Falla de servicio probada como título de imputación.

En efecto, al ser claro que no hay posibilidad de que exista una condena en contra del Distrito de Cali, no habría fundamento entonces para afectar Póliza de Seguro No. 1507221003127, pues no se materializó ningún riesgo amparado por la póliza.

Así pues, se concluye que al no reunirse los supuestos para que se configure la responsabilidad por parte de Distrito de Cali, no existe ningún tipo de obligación a cargo de mi representada de pagar.

Solicito respetuosamente declarar PROBADA esta excepción.

SEGUNDA EXCEPCIÓN: LÍMITES MÁXIMOS DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA

Pese a la carencia de fundamentos de la acción y sin que constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada, resulta oportuno señalar que la única póliza que podrá ser afectada en ocasión de los hechos esbozados en la

demanda es la Póliza de Seguro No 1507221003127, en esta se estipularon las condiciones contractuales que obligan a mi procurada, tales como: los límites asegurados, los amparos otorgados, las exclusiones, los deducibles, entre otras estipulaciones.

La póliza cubre los siguientes rubros:

COBERTURAS		VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE	
P.L.O.: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 1.400.000.000,00	\$ 1.400.000.000,00		5% PERD Min 3 (SMMLV)	VAP No Inferior a 3 SMMLV
Responsabilidad Civil patronal	\$ 420.000.000,00	\$ 700.000.000,00		5% PERD Min 3 (SMMLV)	VAP No Inferior a 3 SMMLV
Gastos medicos y hospitalarios	\$ 280.000.000,00	\$ 700.000.000,00		NO APLICA	
Responsabilidad Civil parqueaderos	\$ 200.000.000,00	\$ 400.000.000,00		5 % PERD Min 3 (SMMLV)	
Responsabilidad Civil para contratistas y subcontratistas	\$ 840.000.000,00	\$ 1.400.000.000,00		5% PERD Min 3 (SMMLV)	VAP No Inferior a 3 SMMLV
Responsabilidad Civil Vehiculos propios y no propios	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00		5% PERD Min 3 (SMMLV)	VAP No Inferior a 3 SMMLV
Responsabilidad Civil productos	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00		5% PERD Min 3 (SMMLV)	
Responsabilidad Civil cruzada	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00		5% PERD Min 3 (SMMLV)	VAP No Inferior a 3 SMMLV

En este sentido, solicito al Despacho tener a consideración la descripción detallada del mencionado contrato de seguro, de suerte que no se transgreda el clausulado contractual.

Así pues, los amparos a los que se hizo referencia en este punto, están evidentemente enmarcados dentro de las condiciones particulares y generales del contrato, ya que son ellas las que delimitan la extensión del riesgo asumido por el asegurador y por ende, las mismas establecen el ámbito del amparo, pues el mismo no opera de forma automática, de modo, se observa que en el presente caso no se reúnen los presupuestos para que mi representada acceda a una indemnización a favor de la parte actora.

Únicamente en el remoto, improbable e hipotético caso que el Despacho resuelva favorablemente las pretensiones de la accionante, solicito tener a consideración que la responsabilidad de la compañía a la que represento está limitada por la suma asegurada o a los sublímites que por evento se hayan pactado de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio.

Así las cosas, en el hipotético e improbable evento de que prosperen las pretensiones de la demanda, el amparo que se afectaría es el de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, lo que significa que la aseguradora en ningún caso estará obligada a pagar una indemnización que exceda la suma de MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$1.400.000.000) por perjuicios morales, biológicos, fisiológicos, estéticos, a la vida de relación y el lucro cesante consolidado. Lo anterior en virtud del contrato de coaseguro aceptado con la Aseguradora Solidaria de Colombia, quien tiene la póliza principal.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

TERCERA EXCEPCIÓN: CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE COBERTURA DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 1507221003127.

En las condiciones de la Póliza de Seguro No. 1507221003127, se establecen los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada, y delimitan la extensión del riesgo asumido por ella. En efecto, en ellas se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio aseguraticio.

Ahora bien, tal como lo señala el Artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume:

"(...) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado."

En virtud de la facultad citada en el referido artículo, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, siempre supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, e incorpora en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a la prestación señalada en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura y se encuentran contenidas en las condiciones generales de la misma que se adjuntan con el presente escrito.

En este sentido, si logra acreditarse al menos una de las demás exclusiones consignadas en las condiciones generales o particulares de la referida póliza, no habría lugar a indemnización de ningún tipo por parte de mi representada.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

CUARTA EXCEPCIÓN: EL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES

Sin que esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna, es pertinente mencionar que la obligación de la aseguradora sólo nace si efectivamente se realiza el riesgo amparado en la póliza y no se configura ninguna de las causales de exclusión o de inoperancia del contrato de seguro, convencionales o legales. Esto significa que la responsabilidad se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del respectivo contrato, según su texto literal y por supuesto la obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada se limita a la suma asegurada, siendo este el tope máximo, además de que son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el Código de Comercio, que en su Art. 1079 establece que " El asegurador no estará

obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada.”.

Se hace imprescindible destacar que la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumple la condición pactada de la que pende para su surgimiento, condición esa que es la realización del riesgo asegurado o siniestro, o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad, por ende la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de cada póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, etc. Al respecto siempre se deberán atender los riesgos asumidos por la convocada, los valores asegurados para cada uno de los amparos, etc.

La póliza utilizada como fundamento contractual de la convocatoria, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sumas aseguradas, deducibles (que es la porción que de cualquier siniestro debe asumir la entidad asegurada), las exclusiones de amparo, la vigencia, etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial, que sirve de base para el llamamiento en garantía, al contenido de las condiciones de la póliza.

Consecuentemente la posibilidad de que surja responsabilidad de la aseguradora depende estrictamente de las diversas estipulaciones contractuales, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según esas condiciones y no a cualquier evento, ni a cualquier riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

QUINTA EXCEPCIÓN: DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

SEXTA EXCEPCIÓN: PRESCRIPCIÓN:

Se formula la presente excepción con el fin de solicitar al despacho que, en el caso en que se evidencie o pruebe durante el transcurso del proceso que hubo un reclamo por parte de los demandantes al Distrito de Cali de forma previa o anterior a la admisión del llamamiento en garantía formulado el Distrito de Cali, la configuración del fenómeno prescriptivo se contabilizará desde ese primer reclamo al asegurado y si desde aquella calenda transcurrió más de dos años hasta la formulación del llamamiento en garantía en contra de mi representada sería claro que operó el fenómeno de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, situación que impedirá que se imponga obligación alguna a cargo de mi mandante.

En lo que respecta a la prescripción, se tiene que es un fenómeno jurídico a través del cual se pueden adquirir derechos o extinguir obligaciones, en efecto, el artículo 2512 del Código Civil establece:

"(...) Artículo 2512. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción (...)"

Por su parte, el artículo 2535 Ibídem, que contempla la prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales y dispone: *"(...) Artículo 2535. La prescripción que extingue las acciones y derechos exige solamente cierto lapso de tiempo durante la cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta ese tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. (...)"*

El Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros y en su artículo 1081 establece previsiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, si no también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Al respecto señala la mencionada disposición:

"(...) Art. 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes (...)". (Negrita por fuera del texto original).

Al señalar la disposición transcrita, los parámetros para determinar el momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción, distingue entre el momento en que el interesado, quien deriva un derecho del contrato de seguro, ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, en la prescripción ordinaria; y, el momento del nacimiento del derecho, independientemente de cualquier circunstancia y aun cuando no se pueda establecer si el interesado tuvo o no conocimiento de tal hecho, en la extraordinaria. Se destaca, entonces, el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción como rasgo que diferencia la prescripción ordinaria de la extraordinaria, pues en tanto en la primera exige la presencia de este elemento subjetivo, en la segunda no.

A su turno, indica el artículo 1131 del Código de Comercio lo siguiente:

"ARTÍCULO 1131. <OCURRENCIA DEL SINIESTRO>. <Artículo subrogado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial' (Subrayas del texto original – Negrilla fuera del original)

Ahora bien, jurisprudencialmente, en sentencia del 29 de junio de 2007, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil precisó:

"(...) d) Mientras que el término de la ordinaria es de sólo dos años, el de la extraordinaria se extiende a cinco, justificándose su ampliación por aquello de que

luego de expirado, se entiende que todas las situaciones jurídicas han quedado consolidadas y, por contera, definidas. Es pues un término límite, al mismo tiempo que fatal, como se desprende de la hermenéutica racional de la normatividad patria, en asocio de sus antecedentes legislativos, ya registrados.

e) Para la primera, el anotado término de dos años irrumpe desde cuando el titular conoció o debió conocer la ocurrencia del hecho que habilita su ejercicio, como ya tangencialmente se mencionó. Al respecto, desde un ángulo jurídico-temporal, pertinente es destacar que uno es el momento de ocurrencia del hecho y otro aquél en que el accionante supo o debió saber de su acaecimiento, sin perjuicio, claro está, de que, en casos específicos, como suele suceder con inusitada frecuencia en la praxis, puedan darse las dos circunstancias en un mismo tempus. La extraordinaria se inicia a partir de cuando nace el derecho, objetivamente considerado. Por ello, conforme ya se observó, opera frente a toda clase de personas y al margen de cualquier conocimiento (real o efectivo, presunto o presuntivo) (...)". (Subrayado fuera de texto).

Es por ello que, si en el curso del proceso se prueba que existió una reclamación anterior, será a partir de aquella calenda desde donde el despacho deberá contar el termino prescriptivo y si transcurrió más de dos años hasta la radicación del llamamiento en garantía entonces sería claro que operó la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.

Solicito declarar probada la presente excepción.

SÉPTIMA EXCEPCIÓN: INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ENTRE EL DEMANDADO DISTRITO DE CALI Y MAPFRE SEGUROS.

Como quiera que la razón para vincular a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., es la existencia del contrato de seguro suscrito entre esta con el DISTRITO DE CALI, teniendo en cuenta que la compañía no participo ni intervino en los hechos que fundamentan la acción, no siendo posible que haya obligación solidaria, entendida esta como aquella con pluralidad de sujetos, que consiste en que existiendo varios deudores o acreedores de una prestación que, pudiendo ser divisible , se puede exigir a cada uno de los deudores o acreedores por el total de ella, de manera que el efectuado o recibido de uno de ellos, extingue toda la obligación respecto al resto.

Respecto a estas obligaciones el código civil Colombiano establece:

ARTÍCULO 1568. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para

con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.

OCTAVA EXCEPCIÓN: INNOMINADA:

Esta excepción tiene su fundamento especial en el artículo 282 del Código General del proceso. Dice esta norma: "Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deberán alegarse en la contestación de la demanda".

No todo lo que constituye excepción que pueda beneficiar al demandado se puede visibilizar desde el comienzo del proceso, por cuanto que éste, apenas empezando, no es susceptible de pronunciamientos de fondo. Es necesario que el proceso avance y a medida que lo haga, se vayan notando las coincidencias o contradicciones en las expresiones de las partes que lo componen.

Lo que sí vale desde el comienzo, es la sinceridad, seriedad y seguridad con que cada una de las partes use para plasmar sus hechos. y sus puntos de vista en torno de esos hechos, que a la postre pueden identificar una excepción, concepto éste con el cual o bajo el cual generalmente se expone un medio de defensa por parte del demandado.

En el fondo, pues, lo que interesa es que, a falta de titularidad y precisión gramatical del término, lo que vale, es que el demandado exprese tales circunstancias de hecho con las que el juez pueda llegar al convencimiento de que lo que se impone no es una condena, sino la absolución del demandado o, como en este caso, la plena exclusión de éste por todas las razones aducidas en el presente escrito.

PRUEBAS

Documentales:

Solicito se tenga como prueba documental las siguientes:

1. Carátula de la póliza.
2. Condiciones generales de la póliza.

Interrogatorios de parte:

Solicito a su Señoría se cite en interrogatorio de parte a la parte demandante sobre los hechos que dan origen a la demanda.

Ratificación de documentos:

Solicito a su Señoría ordenar a la parte demandante la ratificación de los siguientes documentos:

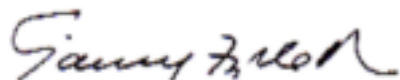
- Material fotográfico del lugar de los hechos donde se presentó el siniestro vial, al mismo tiempo de las lesiones que presento mi poderdante a raíz del suceso.

NOTIFICACIONES

Mi procurada podrá ser notificada en la dirección indicada en el Certificado de Existencia y Representación Legal.

La suscrita apoderada judicial puede ser notificada en la CR 1 OESTE 1 A-30 APTO 801 en la ciudad de Cali. Correo electrónico: trujillo445@emcali.net.co y trujillorodriguezconsultores1@gmail.com. Teléfono: 3108434961.

Del Señor Juez, con el debido respeto,



FANNY TRUJILLO RODRIGUEZ

Cédula de ciudadanía No. 31.280.445 de Cali

Tarjeta Profesional No. 63.738 del Consejo Superior de la Judicatura.